

SESIONES ORDINARIAS

2003

ORDEN DEL DIA N° 2979

COMISIONES DE LEGISLACION DEL TRABAJO Y DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Impreso el día 3 de noviembre de 2003

Término del artículo 113: 12 de noviembre de 2003

SUMARIO: **Pedido** de informes al Poder Ejecutivo, sobre la cantidad de libretas de trabajo rural expedidas y registradas desde la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores y otras cuestiones conexas.

1.-**Sellarés** (2.532-D.-2003.)

2.-**González (M. A.) y otros** (2.832-D.-2003.)

Dictamen de las comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Agricultura y Ganadería han considerado los proyectos de resolución del señor diputado Sellarés y de la señora diputada González (M. A.) y otros señores diputados por los que se solicita al Poder Ejecutivo informe sobre diversas cuestiones relacionadas con los trabajadores rurales; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que por donde corresponda informe sobre las siguientes cuestiones referidas a los trabajadores rurales:

a) Cantidad de libretas de trabajo rural expedidas y registradas desde la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Deberá detallarse año por año desde el 1° de enero del año 2000 hasta la fecha.

b) Cantidad de empleadores que han cumplimentado en el mismo período señalado en las obligaciones previstas en el artículo 5° de la ley 25.191.

c) Cantidad de empleadores comprendidos en las leyes 22.248 y 23.808. En este caso, tratándose

de una cifra estimativa acompañese los estudios que fundamentan la estimación, discriminándose por provincia.

d) Cantidad de trabajadores comprendidos en las leyes 22.248 y 23.808. En este caso tratándose de una cifra estimativa acompañese los estudios que fundamentan la estimación. De ser posible agrúpese por sexo y edad del trabajador, discriminándose por provincia.

e) Infórmese sobre la cantidad de casos de trabajadores “en negro” detectados en el mismo período señalado en 1. En su caso deberá agruparse la información mes por mes. Infórmese asimismo casos en que se hayan detectado “salarios en negro”. Discrimínese por año y por provincia.

f) Cantidad de impugnaciones a las actas labradas por infracciones a la ley 25.191. Cantidad de causas en trámite y de causas finiquitadas. Determinar en los casos de causas judiciales, qué cantidad fue a favor del Renatre y qué cantidad a favor del empleador.

g) Infórmese sobre la forma en que se preparó el cuerpo de inspectores del Renatre y con qué cantidad de inspectores se cuenta por provincia y por localidad.

h) Ratifíquese o rectifíquese la información periódica del Suplemento Económico del diario “Página 12” de fecha 8 de junio de 2003 donde se manifiesta que el sistema de inspecciones del Renatre se privatizó o se privatizaría.

En caso afirmativo, infórmese sobre dicha modalidad y acompañese el dictamen de asuntos jurídicos que precedió a la decisión.

i) Infórmese la composición de los sucesivos directorios del Renatre desde enero del 2000 hasta la actualidad.

j) Acompañese copia de los balances y presupuestos de la entidad creada por la ley 25.191 des-

de su creación (noviembre de 1999) hasta la actualidad. Cantidad de personal que se desempeña en el Renatre.

Sala de las comisiones, 23 de octubre de 2003.

Saúl E. Ubaldini. – Adrián Menem. – Melchor A. Posse. – Guillermo E. Alchouron. – Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – Luis A. Sebriano. – Sarah A. Picazo. – Haydé T. Savron. – Carlos A. Larreguy. – Alfredo E. Allende. – Marta del Carmen Argul. – Jesús A. Blanco. – Carlos Brown. – Pascual Cappelleri. – Carlos A. Castellani. – Carlos A. Courel. – José C. G. Cusinato. – Daniel M. Esaín. – Horacio A. Fernández. – María E. Herzovich. – Atlanto Honcheruk. – Marta S. Milesi. – Lorenzo A. Pepe. – Alberto J. Piccinini. – José A. Roselli. – Mirta E. Rubini. – Francisco N. Sellarés. – Raúl J. Solmoirago. – Margarita R. Stolbizer. – Ovidio O. Zúñiga.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Agricultura y Ganadería al considerar los proyectos de resolución de la señora diputada González (M. A.) y otros señores diputados, y del señor diputado Sellarés, por los que se solicita al Poder Ejecutivo informe sobre diversas cuestiones relacionadas con los trabajadores rurales, creen innecesario abundar en más detalles que los expuestos en los fundamentos de los proyectos que lo acompañan, por lo que los hacen suyos y así lo expresan.

Saúl E. Ubaldini.

FUNDAMENTOS

1

Señor presidente:

La contribución con destino al Renatre, es una carga que reemplaza a la existente desde el año 1991, con destino al Fondo Nacional de Empleo. Puesto que desde el año 1991, en el que se creó el Fondo Nacional de Empleo todos los empleadores, rurales o no, contribuyen con el 1,5% de la remuneración de cada trabajador ocupado. Sin embargo los trabajadores del sector agropecuario estaban excluidos de las prestaciones por desempleo. Con la sanción de la ley 25.191, por la cual se crea el Renatre, las contribuciones de los empleadores rurales, les permitirán a los trabajadores del sector acceder a las prestaciones por desempleo previstas a otorgar mediante el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo del Renatre.

La libreta del trabajador rural será como el documento, o sea que será probatorio de la relación la-

boral, siendo su tenencia obligatoria, lo que significa que todos los empleadores de trabajadores rurales deberán exigirles a éstos esa libreta. De no contar con ella, quien ocupe a una persona de este rubro, deberá tramitar la misma disponiendo de cinco días para iniciar las gestiones ante el Renatre y 30 días para reunir toda esa documentación. También la libreta será una prueba escrita para asegurar la inscripción en el sistema previsional, tanto de los aportes y contribuciones efectuadas, así como de los años de trabajo.

Lo que se pretende desde el Renatre es que, llegado el momento de jubilarse (20 años de antigüedad) el trabajador rural podrá dirigirse al Renatre y solicitar la certificación de trabajo.

Con relación a las obligaciones del empleador figuran, primordialmente, requerir la libreta de trabajo a quien va a ocupar en su establecimiento cuando se inicia la relación laboral, registrar en la misma la fecha de ingreso, los datos relativos al inicio, desarrollo y extinción de la relación laboral y además informar al Renatre, en forma trimestral, sobre los pagos efectuados. Mientras que son obligaciones del trabajador, presentar al inicio de su nueva relación laboral la libreta de trabajo (en el caso de extravío deberá realizar la denuncia policial).

Con relación a las sanciones por incumplimiento de lo estipulado en la misma ley se han fijado distintos niveles: leves, graves y muy graves. En las sanciones "leves" (por no informar trimestralmente), el empleador deberá afrontar multas de \$80 a \$250 por cada trabajador.

En las determinadas como "graves" (no exhibir la libreta, no registrar los datos en la misma, no tenerla en el lugar de la prestación laboral o no entregarla al finalizar la relación laboral) las multas ascienden desde \$ 250 a \$ 1.000 por cada trabajador. Y finalmente, las sanciones catalogadas como "muy graves" (no pedirle al trabajador la libreta al iniciarse una relación laboral o no tramitar la misma en caso de carecerla), tienen un costo que va desde los \$ 1.000 a los \$ 5.000, también por cada trabajador. "En caso de reincidencia, el Renatre podrá solicitar la clausura del establecimiento".

El presente proyecto apunta a mantener una continua mirada sobre el cumplimiento de esta legislación, de manera de garantizar la protección de los trabajadores del sector rural, permitiendo la igualdad de oportunidades a partir de la inclusión en el sistema de seguridad social. Por lo expuesto, solicito a los señores diputados acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.

Francisco N. Sellarés.

2

Señor presidente:

La ley 25.191 se dictó con el objeto de dar protección a los trabajadores rurales. Ello por cuanto

se trata de un sector laboral altamente castigado por la falta de controles y la ausencia de una cultura de responsabilidad social.

Los bajos salarios, la ausencia de registración, las remuneraciones en negro traen como resultado un difícil acceso a las prestaciones sociales, y en especial a la jubilaciones y pensiones.

El domingo próximo pasado, un diario vespertino realizó un análisis de la cuestión donde se refleja que la ley y el registro creado en consecuencia no han dado los resultados esperados. Agrava la cuestión las declaraciones de un funcionario que manifiesta la intención de la entidad de "privatizar" el sistema de inspecciones.

Entiendo que resulta necesario que este cuerpo colegiado tenga información suficiente sobre los resultados de las normas que ha dictado, con el objeto de saber si es necesaria su corrección, rectificación o incluso su derogación.

Cabe recordar, para comprender la cuestión expuesta, que el Estatuto del Peón Rural (ley 22.248) contempla dos grupos de trabajadores: 1) *permanentes*, con un régimen similar a la Ley de Contrato de Trabajo pero con menores beneficios; 2) los trabajadores *no permanentes*, que son aquellos que se contratan para tareas cíclicas, esporádicas, ocasionales, extraordinarias, etcétera (los cosechadores y empacadores de fruta no están incluidos en este estatuto).

Los trabajadores no permanentes se registran en un libro y se le liquidan salarios por jornal o por mes con las siguientes características: cada vez que cobra se les abona el porcentual de aguinaldo correspondiente a ese pago y al concluir el ciclo o la tarea ocasional se le abona el 5 % de todo lo percibido en ese lapso en concepto de vacaciones no gozadas. No tienen ningún otro tipo de indemnización.

En los dos tipos de trabajadores existe el problema de la falta de registración, sobre todo porque en el caso que se le otorgue vivienda trabaja toda la familia pero inscriben a uno solo. Las escalas salariales son muy bajas, las fija la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y para cada provincia rigen salarios distintos.

Si combinamos ambos factores (salarios bajos y falta de registro) la recaudación es muy baja y la dificultad de acreditar treinta años con aportes en el SIJP es casi ilusoria. En los trabajadores no permanentes se agrava más.

Otros factores que inciden en la desprotección de este colectivo laboral son, el desconocimiento de los derechos por falta de información, las pocas o nulas posibilidades de conseguir asesoramiento jurídico, las distancias a los centros urbanos, etcétera. Generalmente, la administración de los campos se hace desde una oficina de la capital y el trabajador muchas veces ni se entera de los cambios de

empleador, no conservan ninguna documentación ni sabe con exactitud quién es el empleador.

Si con el sistema de corresponsabilidad gremial que establecía beneficios sobre la base de montos globales de facturación (con un sistema puramente solidario y de reparto) era dificultosa la posibilidad de acceder a una jubilación, con la ley 24.241, que se basa en la acreditación de los años con aportes por parte del interesado, la posibilidad de acceder a la jubilación es casi nula.

La mayoría de los trabajadores rurales que inicia el trámite no reúne los años de servicios con aportes que requiere el nuevo régimen. No porque no los haya trabajado sino porque no puede acreditarlos. Las solicitudes de jubilaciones por invalidez son casi siempre a instancia del propio empleador que quiere desvincularlo del contrato de trabajo.

Muchas invalideces se originan en los riesgos propios de la actividad o por la falta de atención médica adecuada. Se agrava el problema porque el contrato de trabajo rural incluye la vivienda, y el estatuto les otorga 15 días para desalojar el inmueble desde el momento de la ruptura del vínculo laboral.

En materia de obra social la actividad tenía un instituto con un aporte diferencial, el empleador pagaba 1,5 % más de lo establecido en la ley 23.660. Con las reformas de la década del '90 el instituto fue disuelto y en su lugar apareada Ospreda como una obra social con el aporte común del 6 % de contribución patronal.

Como vemos, la desprotección del trabajador rural se agudizó en estos últimos años, circunstancia que llevó al dictado de la ley 25.191.

El Renatre tiene por finalidad ejercer un importante control sobre la actividad rural con el objeto de proteger al trabajador agrario y facilitarle el acceso a los beneficios sociales.

Por ello, con el objeto de conocer fehacientemente si dicha institución ha sido un instrumento apto para el fin protectorio que se ha tenido en mira a su dictado, es que propicio el presente proyecto de resolución.

*María A. González. – Marcela Bordenave.
– Lucrecia Monteagudo. – Alberto
Piccinini. – Atilio Tazzioli.*

ANTECEDENTES

1

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo disponga informar por medio de los organismos pertinentes:

–El número de inscripciones realizadas, en el territorio nacional y por cada provincia, de trabajadores rurales incluidos en el régimen de la ley 25.191 (Libreta del Trabajador Rural).

–La cantidad de procedimientos de control realizados en busca de eventuales infracciones a los términos de la citada legislación, indicando el estado en que se encuentren las actuaciones iniciadas.

Francisco N. Sellarés.

2

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que por donde corresponda informe sobre las siguientes cuestiones referidas a los trabajadores rurales:

a) Cantidad de libretas de trabajo rural expedidas y registradas desde la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Deberá detallarse año por año desde el 1° de enero del año 2000 hasta la fecha;

b) Cantidad de empleadores que han cumplimentado en el mismo período señalado en las obligaciones previstas en el artículo 5° de la ley 25.191;

c) Cantidad de empleadores comprendidos en las leyes 22.248 y 23.808. En este caso tratándose de una cifra estimativa acompáñese los estudios que fundamentan la estimación, discriminándose por provincia;

d) Cantidad de trabajadores comprendidos en las leyes 22.248 y 23.808. En este caso tratándose de una cifra estimativa acompáñese los estudios que fundamentan la estimación. De ser posible agrúpe-

se por sexo y edad del trabajador, discriminándose por provincia;

e) Infórmese sobre la cantidad de casos de trabajadores “en negro” detectados en el mismo período señalado en 1. En su caso deberá agruparse la información mes por mes. Infórmese asimismo casos en que se hayan detectado “salarios en negro”. Discrimínese por año y por provincia;

f) Cantidad de impugnaciones a las actas labradas por infracciones a la ley 25.191. Cantidad de causas en trámite y de causas finiquitadas. Determinar en los casos de causas judiciales, qué cantidad fueron a favor del Renatre, y qué cantidad a favor del empleador;

g) Infórmese sobre la forma en que se preparó el cuerpo de inspectores del Renatre y con qué cantidad de inspectores se cuenta por provincia y por localidad;

h) Ratifíquese o rectifíquese la información periodística del suplemento económico del diario “Página/12” de fecha 8 de junio del 2003 donde se manifiesta que el sistema de inspecciones del Renatre se privatizó o se privatizaría.

En caso afirmativo infórmese sobre dicha modalidad y acompáñese el dictamen de asuntos jurídicos que precedió a la decisión;

i) Infórmese la composición de los sucesivos directorios del Renatre desde enero, del 2000 hasta la actualidad;

j) Acompáñese copia de los balances y presupuestos de la entidad creada por la ley 25.191 desde su creación (noviembre de 1999) hasta la actualidad. Cantidad de personal que se desempeña en el Renatre.

*María A. González. – Marcela Bordenave.
– Lucrecia Monteagudo. – Alberto Piccinini. – Atilio Tazzioli.*